CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD
ACTOR: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

En la Ciudad de México, a diez de abril de dos mil veinticinco, se da cuenta al **Ministro Javier Laynez Potisek**, instructor en el presente asunto, con el expediente de la controversia constitucional citada al rubro, con número de registro 920-SEP/JF, turnada conforme al auto de radicación de once de marzo del año en curso y publicado el diecinueve de marzo posterior. Conste.

Ciudad de México, a diez de abril de dos mil veinticinco.

Vistos el oficio y anexos de quien se ostenta como Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, mediante los cuales promueve controversia constitucional contra el Poder Judicial de la entidad, en la que impugna:

“IV. La norma general, acto u omisión cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado:

- 1.- Se impugna el acto emanado del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través de su Presidente consistente en el **auto de fecha veinticuatro de enero de dos mil veinticinco**, a través del cual admite a trámite la controversia de inconstitucionalidad local número 2/2025.*
- 2.- Se impugna el acto emanado del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través de su presidente consistente en el **auto de fecha veinticuatro de enero de dos mil veinticinco**, a través del cual se concede la suspensión del acto impugnado en la controversia de inconstitucionalidad local número 2/2025, para que sean suspendidos los efectos de la reforma donde se modifican por adición los artículos 12, fracción XI, 21, fracción XVIII y 28 Bis del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León.*
- 3.- Se impugna el acto emanado del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través de su Presidente consistente en el **auto de fecha cuatro de febrero de dos mil veinticinco**, a través del cual admite a trámite la ampliación de la controversia de inconstitucionalidad local 2/2025.*
- 4.- Se impugna el acto emanado del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través de su presidente consistente en el **auto de fecha cuatro de febrero de dos mil veinticinco**, a través del cual se amplía la suspensión del acto impugnado en la controversia de inconstitucionalidad local número 2/2025, y se otorga para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardaban antes de la emisión del acuerdo identificado como ‘acuerdo de remisión SO-SERA-1/2025, de fecha 24 de enero de 2025, así como la ‘Fe de erratas’ de fecha 27 de enero de 2025, relativa al mencionado acuerdo, y no se ejecuten los mismos y en caso de haberse ejecutado, vuelvan las cosas al estado que se encontraban antes de su emisión.*
- 5.- La orden dada al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, para que no realice las funciones que constitucionalmente le corresponden de acuerdo a la legislación aplicable en el Estado de Nuevo León, esto dentro de la controversia de inconstitucionalidad 2/2025, ordenando el Poder Demandado que el Tribunal de Justicia Administrativa se abstuviera de seguir ejerciendo sus facultades constitucionales reconocidas por el numeral 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que claramente invade la esfera competencial de Tribunal de Justicia Administrativa y priva al mismos de seguir ejerciendo las atribuciones constitucionalmente conferidas.*
- 6.- La omisión del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, de abstenerse y respetar la normativa vigente y constitucionalmente aprobada dentro del Estado de Nuevo León, que pone en grave peligro el orden constitucional local y que implica de manera excepcional*

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES 143/2025

que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, intervenga para restaurar el orden constitucional local del Estado de Nuevo León.”

Personalidad. Con fundamento en el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene como compareciente al promovente mencionado con anterioridad con la personalidad que ostenta¹.

Desechamiento. Tomando en cuenta que la procedencia de este medio de control constitucional es una cuestión de orden público que se debe verificar incluso de oficio, esta instrucción considera que de la revisión integral de la demanda y sus anexos se advierte que la controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León es improcedente y, por ende, debe desecharse, atento a las consideraciones que se desarrollan a continuación.

En términos de lo establecido en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor está facultado para desechar de plano un medio de control de constitucionalidad, como el que ahora se analiza, si advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que se corrobora con la siguiente jurisprudencia:

“CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo ‘indudable’ resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa.”²

El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por manifiesto debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, los escritos aclaratorios o de ampliación y, en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones; en tanto que lo indudable se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la substanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa.

Sentado lo anterior se precisa que de la lectura de la demanda y sus anexos se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de la materia³, **relativa a la falta de**

¹ De conformidad con la documental que al efecto exhibe y en términos de la normatividad siguiente:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León

Artículo 111. El Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León se deposita en un ciudadano que se denominará Gobernador del Estado o Titular del Ejecutivo.

Reglamento de las Unidades Administrativas de la Persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal

Artículo 16. La persona titular de la Consejería Jurídica tendrá las siguientes atribuciones: (...).

IX. Representar a la persona Titular del Poder Ejecutivo, en los juicios de (sic) electorales locales y federales, así como en las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales federales, en términos de las disposiciones legales aplicables. (...).

² **Jurisprudencia P./J. 128/2001**, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de dos mil uno, página 803, registro 188643.

³ **Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**

Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto; (...).

definitividad de los actos que se pretende impugnar, en la medida en que fue dictado dentro de un procedimiento que no ha concluido y respecto del cual la controversia constitucional no es el mecanismo idóneo para revocarlo.

Al efecto, de la jurisprudencia P./J. 12/99, de rubro: **“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA”**⁴, deriva el criterio del Pleno de este Alto Tribunal relativo a que el principio de definitividad se traduce, no sólo en la existencia legal de un recurso o medio de defensa por el cual se pueda combatir el acto materia de impugnación en una controversia constitucional, sino, además, en la existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, esto es, que está sustanciándose o que se encuentra pendiente de resolución ante la misma o alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional, caso en el que el afectado debe esperar hasta la conclusión del procedimiento para poder impugnar la resolución y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio.

Del contenido del dispositivo legal en comento y del criterio referido se advierte que este Alto Tribunal ha establecido que se desprenden tres hipótesis para tener por actualizada la referida causal de improcedencia, a saber:

- 1) Que esté prevista legalmente una vía en contra del acto impugnado en la controversia constitucional, susceptible de revocarlo, modificarlo o nulificarlo, y que dicha vía no se haya agotado;
- 2) Que habiéndose interpuesto el recurso o medio legal, aún no se haya dictado la resolución correspondiente por la cual pudiera modificarse o nulificarse el acto controvertido a través de aquélla; y,
- 3) Que el acto impugnado se haya emitido dentro de un procedimiento que no ha concluido, esto es, que esté pendiente de dictarse la resolución definitiva que pueda ser impugnada en este medio de control constitucional, en el que la cuestión debatida constituya la materia propia de la controversia constitucional.

Sentado lo anterior se hace referencia al caso concreto en que el poder actor impugna los acuerdos de **veinticuatro de enero de dos mil veinticinco** mediante los cuales el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León admitió a trámite la demanda de controversia de inconstitucionalidad **2/2025** promovida por el Congreso local contra el decreto emitido por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado que reforma los artículos 12, fracción XI, 21 fracción XVIII y 28 Bis del Reglamento Interior del Tribunal, y concedió la suspensión en el citado medio de control constitucional. De igual forma, la parte actora controvierte los acuerdos de **cuatro de febrero de dos mil veinticinco** a través de los cual el Tribunal Superior de Justicia del Estado admitió a trámite la ampliación de demanda de la referida controversia de inconstitucionalidad y amplía la concesión de la suspensión decretada.

Así, se estima que este medio de control constitucional es improcedente toda vez que contra los proveídos que se impugnan no sólo se prevé un medio de defensa, sino que, además, no constituyen un acto definitivo que pongan fin al procedimiento, como a continuación se demuestra.

⁴ **Tesis: P./J. 12/99**, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y nueve, página 275, número de registro 194292.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 143/2025

Los artículos 16, 18, 29, 30, 32 y 38 de la Ley Reglamentaria del Artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, que regulan el procedimiento de controversias de inconstitucionalidad seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa, establecen:

De la Suspensión

“Artículo 16. Tratándose de las controversias de inconstitucionalidad, el Presidente del Tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto reclamado hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva, haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada y a todas las autoridades que deban acatar la suspensión para su observancia. La suspensión y los alcances de ésta, se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Presidente del Tribunal en términos del artículo 37, en aquello que resulte aplicable.

La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia de inconstitucionalidad se hubiere planteado respecto de normas generales.”

“Artículo 18. Las partes podrán solicitar la suspensión en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte sentencia definitiva y se tramitará por vía incidental.”

De la Instrucción

“Artículo 29. Recibida la demanda, el Presidente del Tribunal examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano.

Si la controversia de inconstitucionalidad reúne los requisitos establecidos en esta Ley, el Presidente del Tribunal dictará el auto de admisión que corresponda.

Si los escritos de demanda, contestación o ampliación de éstos fueren oscuros o irregulares, el Presidente del Tribunal prevendrá a los promoventes para que subsanen las irregularidades dentro del plazo de cinco días.

De no subsanarse las irregularidades requeridas, Presidente del Tribunal correrá traslado al Procurador General de Justicia del Estado, por cinco días, en el caso de que no se subsanaran las irregularidades sobre las que se hubiere hecho el requerimiento y si a juicio de éste, la importancia y trascendencia del asunto lo amerita y, con vista en su pedimento si lo hiciere, admitirá o desechará la demanda dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

“Artículo 30. Admitida la demanda, el Presidente del Tribunal ordenará emplazar a la parte demandada para que dentro del término de treinta días produzca su contestación, y dará vista a las demás partes para que dentro del mismo plazo manifiesten lo que a su derecho convenga.

La falta de contestación de la demanda, dentro del plazo respectivo, hará presumir como ciertos los hechos que en ellas se hubieren imputado directamente a la parte demandada o a la parte actora, según corresponda, salvo prueba en contrario.”

“Artículo 32. Habiendo transcurrido el plazo para contestar la demanda y en su caso, su ampliación, el Presidente del Tribunal señalará fecha para la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas que deberá verificarse dentro de los treinta días siguientes. El Presidente del Tribunal podrá ampliar el término de celebración de la audiencia, cuando la importancia y trascendencia del asunto así lo amerite.”

“Artículo 38. Una vez concluida la audiencia, el Presidente turnará el asunto al Pleno del Tribunal, quien designará una comisión de tres magistrados, a efecto de que procedan a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.” (...).

De los preceptos transcritos se advierte, en esencia, el trámite a seguir con las demandas de controversias de inconstitucionalidad que se promuevan ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León:

1. Recibida la demanda, el presidente del tribunal examinará el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto de indudable de improcedencia la desechará de plano.

2. Si ésta se admite, el presidente del tribunal ordenará emplazar a la parte demandada para que dentro del término de treinta días produzca su contestación y dará vista a las demás partes para que dentro del mismo plazo manifiesten lo a que a su derecho convenga.
3. El presidente del tribunal de oficio o a petición de parte **podrá conceder la suspensión del acto reclamado hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva**, haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada y a todas las autoridades que deban acatar la suspensión.
4. Habiendo transcurrido el plazo para contestar la demanda y, en su caso, la ampliación, el presidente del tribunal señalará fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas la cual tendrá verificativo dentro de los treinta días siguientes.
5. Una vez concluida la audiencia, el presidente turnará el asunto al Pleno del tribunal, quien designará una comisión de tres magistrados, **a efecto de que procedan a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente**.

De lo anterior se advierte que el procedimiento de controversia de inconstitucionalidad en el Estado de Nuevo León se compone de diversas etapas dentro de las cuales el presidente del Tribunal Superior de Justicia está en posibilidad de emitir determinaciones sobre aspectos específicos. Estos actos no resuelven en manera definitiva la controversia de inconstitucionalidad pues dicho procedimiento culmina con la resolución que emita el Pleno.

Dicho en otras palabras, el procedimiento correspondiente inicia con la admisión de la demanda y culmina con la sentencia o resolución que se dicte en definitiva.

Por su parte, los artículos 51 y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, establecen:

“Del Recurso de Reclamación

Artículo 51. El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos:

I. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su contestación o sus respectivas ampliaciones;

II. Contra los autos o resoluciones que pongan fin a la controversia de inconstitucionalidad o contra acuerdos dentro del proceso que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un agravio material a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva;

III. Contra los autos o resoluciones de trámite o que pongan fin a un incidente, cuando hubieren sido dictados por el Presidente del Tribunal;

IV. Contra los autos del Presidente del Tribunal en que se otorgue, niegue, modifique o revoque la suspensión;

V. Contra los autos o resoluciones del Presidente del Tribunal que admitan o desechen pruebas; y

VI. En los demás casos que señale esta Ley.

El recurso de reclamación es improcedente contra autos o resoluciones dictados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.”

“Artículo 53. El recurso de reclamación se promoverá ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien correrá traslado a las demás partes para que dentro del plazo de cinco días aleguen lo que a su derecho convenga. Transcurrido este último plazo el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado turnará los autos al Pleno, quien designará una comisión de tres magistrados, a efecto de que elaboren el proyecto de resolución correspondiente, el cual será discutido y, en su caso, aprobado por el Pleno.”

Como puede advertirse de los preceptos transcritos, tanto el acuerdo a través del que se admita una demanda de controversia de inconstitucionalidad, como el que provea respecto de la suspensión, son susceptibles de ser impugnados a través del recurso de reclamación, que deberá interponerse ante el propio presidente, quien correrá traslado a las demás partes para que dentro del plazo de cinco días aleguen lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo se turnarán los autos al Pleno y se designará una comisión de tres magistrados a efecto de que elaboren el proyecto correspondiente, el cual será discutido y, en su caso, aprobado por el Pleno.

Es decir, ni los acuerdos de admisión y ampliación de demanda ni el que provee respecto de la suspensión constituyen actos definitivos, sino hasta que: a) transcurre el plazo para interponer recurso de reclamación, sin que se hubiera intentado; o b) se interpone recurso de reclamación y se emite resolución que confirme, modifique o revoque el auto recurrido.

Como se dijo, el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León señala como actos impugnados los acuerdos de veinticuatro de enero y cuatro de febrero de dos mil veinticinco, a través de los cuales el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado admitió a trámite la demanda y la respectiva ampliación dentro de la controversia de inconstitucionalidad 2/2025 promovida por el Poder Legislativo del Estado, como los diversos en los que determinó conceder la suspensión, en los términos y para los efectos siguientes:

Alcance de la concesión de la suspensión

(...)

En consecuencia, atendiendo a las circunstancias y características particulares del caso, con apoyo en los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley Reglamentaria del artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, se concede la suspensión del acto impugnado, en los términos siguientes:

- *Para que sean suspendidos los efectos de la reforma reglamentaria aquí impugnada, es decir, que las cosas prevalezcan en el estado en que se encontraban antes de la emisión del acto impugnado y no sea aplicada la reforma donde se modifican por adición los artículos 12, fracción XI, 21 fracción XVIII y 28 Bis del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, mediante el decreto aprobado por mayoría en la primera sesión extraordinaria de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, celebrada el 09 de enero del 2025.*

En el entendido de que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, deberá girar las instrucciones necesarias, así como realizar las gestiones que se requieran, para que de inmediato, se le dé cumplimiento a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 25 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, reformado por medio del Decreto 350 emitido por el Congreso del Estado, mismo que fuera publicado el 11 de noviembre del año próximo anterior en el Periódico Oficial del Estado y que entró en vigor al día siguiente, tal como se establece en su primer transitorio; para ello, se deberá turnar de inmediato, de manera reglar, constante y sin limitación alguna, los juicios contenciosos administrativos que se tramitan en ese Tribunal, a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, en base al orden aleatorio y consecutivo respecto de las demás Salas de dicho Tribunal.”

Ampliación de la suspensión

“Se otorga la suspensión, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardaban antes de la emisión del acuerdo identificado como ‘acuerdo de remisión SO-SERA-1/2025, de fecha 24 de enero de 2025, así como de la ‘Fe de erratas’ de fecha 27 de enero de 2025, relativa al mencionado acuerdo, y no se ejecuten los mismos y en caso de haberse ejecutado, vuelvan las cosas al estado que se encontraban hasta antes de su emisión.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 143/2025

Suspensión que surte efectos de inmediato y hasta en tanto se notifique a la autoridad demandada, la sentencia definitiva que se dicte en el presente asunto. (...)”.

De la lectura integral de los conceptos de invalidez se observa que el accionante aduce una intromisión e interferencia por parte del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, pues considera que los acuerdos impugnados transgreden el artículo 155, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como lo dispuesto en la fracción V del artículo 116 de la Constitución Federal, que dota a los tribunales administrativos de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, los recursos contra sus resoluciones.

Además, señala que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León pretende entremeterse en los asuntos que le conciernen al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y que el Poder Judicial local busca imponerse dentro de un asunto en donde no forma parte.

Bastan las explicaciones hasta aquí expuestas para advertir que los acuerdos impugnados no constituyen actos definitivos. En primer lugar, porque en su contra procede el recurso de reclamación previsto en ley y, en segundo, porque será hasta que se decida en definitiva el medio de control constitucional local, cuando se tenga una resolución definitiva.

En efecto, si los actos combatidos en este medio de control constitucional se emitieron en un procedimiento judicial que no ha concluido, esta controversia constitucional resulta improcedente, pues de lo contrario podría llegarse al extremo de que pudieran impugnarse todos y cada uno de los actos que deriven del procedimiento previsto en la Ley Reglamentaria local, lo que no es congruente con la naturaleza de la controversia constitucional.

De forma adicional, tampoco es posible considerar que al momento de la promoción de la controversia constitucional se agotó la definitividad porque, de acuerdo con la Ley Reglamentaria local, el actor debió agotar la vía legalmente establecida para revocar o modificar el acuerdo por el cual se admitió a trámite la demanda de controversia de inconstitucionalidad 2/2025 y su respectiva ampliación, como los diversos en los que se determinó conceder la suspensión respectiva que presuntamente le causa afectación a su esfera jurídica.

Por tanto, al existir un recurso idóneo, cuya naturaleza es justamente la revisión de los actos impugnados en esta controversia constitucional y lograr con ello su revocación, modificación o confirmación, resultaba obligatorio que la parte actora lo agotara de manera previa. De ahí que resulta improcedente este medio de control constitucional.

En consecuencia, por lo manifestado con anterioridad, la presente demanda debe desecharse de plano con fundamento en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de la materia, por actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VI, de ese ordenamiento, resultando aplicable la tesis que a continuación se reproduce:

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTRIBA EN UNA CUESTIÓN DE DERECHO NO DESVIRTUABLE CON LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO. Si de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia de la controversia constitucional y que, por sus propios caracteres, no son desvirtuables con su tramitación pues nada de lo que se arguya o pruebe podrá

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 143/2025

modificar o superar esas consecuencias, aquélla debe considerarse notoriamente improcedente y, por ende, procede desecharla de plano.”⁵

En ese sentido se pronunció la Primera Sala de este Alto Tribunal al resolver el recurso de reclamación **40/2024-CA**, resuelto el veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro; en tanto que la Segunda Sala resolvió en el mismo sentido los recursos de reclamación **314/2023-CA**, **334/2023-CA**, **361/2023-CA**, **364/2023-CA**, **365/2023-CA**, **366/2023-CA**, **368/2023-CA**, **383/2023-CA**, resueltos el seis de diciembre de dos mil veintitrés y diecisiete de enero de dos mil veinticuatro.

Delegados y domicilio. Se tiene al accionante designando delegados a las personas que menciona, así como señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, esto de conformidad con lo establecido en los artículos 11, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de la materia y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 1 de la citada ley.

Acceso al expediente y notificaciones electrónicas. En cuanto a su solicitud de tener acceso al expediente electrónico y recibir notificaciones electrónicas, así como autorizar a las personas que menciona en los mismos términos, se precisa que de la consulta y las constancias generadas en el sistema electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, éstas cuentan con firma electrónica vigente; por tanto, con fundamento en los artículos 5, párrafo primero, 12 y 17, párrafo primero, del Acuerdo General 8/2020, se acuerda favorablemente su petición.

La consulta a través de dicha vía podrá realizarse a partir del primer acuerdo que se dicte posterior al presente auto, de conformidad con el artículo 14, párrafo primero, del citado Acuerdo General 8/2020.

Habilitación de días y horas. Con apoyo en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este acuerdo.

Por las razones expuestas, se

SE ACUERDA:

PRIMERO. Se **desecha de plano**, por manifiesta e indudable improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. Una vez que cause estado este auto, **archívese el expediente como asunto concluido.**

Notifíquese. Por lista y por oficio al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.

Lo proveyó y firma el **Ministro instructor Javier Laynez Potisek**, quien actúa con el Licenciado Eduardo Aranda Martínez, Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe.

Esta hoja forma parte del acuerdo de diez de abril de dos mil veinticinco, dictado por el **Ministro Javier Laynez Potisek**, instructor en la **controversia constitucional 143/2025**, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. **Conste.**
LISA/EDBG

⁵ **Tesis P. LXXI/2004**, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, página 1122, número de registro 179954.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre	JAVIER LAYNEZ POTISEK	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	LAPJ590602HCLYTV03			
Firma	Serie del certificado del firmante	636a6673636a6e00000000000000000000000002c6	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	14/04/2025T03:18:37Z / 13/04/2025T21:18:37-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma	80 c2 bf 79 9c 50 e5 82 8d 14 88 91 7a 31 ad 12 c4 63 62 d2 8a fb a2 cb fb 17 90 da cc 57 ae c6 8c bf b4 c2 97 a7 ba a5 d7 92 9a 59 c9 ae 66 83 91 33 24 86 3a 95 51 d7 c8 8c 84 ec 7d cc 5d 97 79 00 46 e3 38 f9 fa 26 c8 c7 0c 4a cd e1 8e d3 e7 8c 76 70 5f 4a c5 49 c3 d8 bc a3 8c 95 3b e9 cc 3f 23 a1 80 5c c5 0f 8c f1 36 a4 4d b9 78 48 95 5c 6e 2d 98 df cf 57 d2 84 a9 32 8c a4 82 80 c0 19 72 18 9f 53 d7 38 16 3a 3e 2f 1e 8f d9 5f 41 03 e7 83 cb f4 13 1d 82 87 40 c1 d5 d5 82 1b 66 b6 d2 f6 66 2b 6a 5e 44 3d 84 3a 49 bb 2b 56 de ba dd 98 ce 42 dc 7f 35 00 0c 9a af ad f2 8b 25 0b 9d 3c de 53 a2 38 10 fd ed 27 e6 18 bf f3 2d 14 92 bb 48 ea 7e 52 cf ca 1e 14 df a8 68 2c 8d 4c 04 5c 44 23 c5 75 41 1c 03 93 14 71 4e d1 c0 8d 2f 68 9c 0f 91 bb 4e 3f 41 a1 c5 90 f0 e1			
	Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	14/04/2025T03:18:37Z / 13/04/2025T21:18:37-06:00		
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP	636a6673636a6e00000000000000000000000002c6			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	14/04/2025T03:18:37Z / 13/04/2025T21:18:37-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	8524670			
	Datos estampillados	B135D62D61EAD42A75358CE5C8F595E2B31E47F6856C52023194932910F477			

Firmante	Nombre	EDUARDO ARANDA MARTINEZ	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	AAME861230HOCRRD00			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6620636a66320000000000000000000001cd5b	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	10/04/2025T20:26:14Z / 10/04/2025T14:26:14-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma	5d 7f 25 22 a4 8d ee 57 2d d4 b8 bf a9 55 b4 49 e4 a0 c4 c8 d4 d2 94 44 78 00 7a 15 54 05 07 dd 76 43 16 26 45 73 31 ce 85 97 8b ad 3a 50 90 48 ed 01 c8 95 9a 02 d9 e9 95 7a 77 e9 e7 d7 42 21 90 65 c4 41 25 2e 4c c6 ea 42 0d d5 6b 0e 25 e3 9d 3d 64 3e ec 81 4e a5 79 ac 36 b2 6d b8 d3 bf af 7e 80 c1 ad 26 cc df b4 47 6c 78 44 d2 8b 57 fd 56 d4 01 b3 07 8d 8b f5 85 06 43 df 67 a1 5c c7 49 18 5d 28 cd 68 be 1c 09 ac f1 8e 70 0b 4c 11 01 61 94 d3 ff f7 b3 9d 4b 69 8e 56 14 44 45 b7 d4 5c d4 ba 75 6f 62 ca d6 80 25 e2 6a 82 6a ab 13 d3 09 13 31 39 c9 3a 1e 1e 07 32 d8 82 30 bd 13 71 27 de 8e 12 25 da 6a 5b cc 5f 36 9a ca 04 8b 34 f5 13 c2 d7 8e fe e6 e7 78 f9 9e 3a d4 4b 63 de 6b ca 64 d4 7a 30 45 bb e9 51 7e e2 05 fb 4f 5d 7e b5 46 ac c2 dd 40 fb ae dc b8 54 3b			
	Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	10/04/2025T20:26:14Z / 10/04/2025T14:26:14-06:00		
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP	706a6620636a66320000000000000000000001cd5b			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	10/04/2025T20:26:14Z / 10/04/2025T14:26:14-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	8517356			
	Datos estampillados	1AAFF6EE2EA9A69EC3D71679FC9E4DED5E3040C4E1B47F9DFBC6C8E7733F2D6D			